



NUE 270-A-2019 (CE)

contra Policía Nacional Civil (PNC)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con veinticinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veinte.

Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] en adelante, el apelante, en contra de la resolución emitida por el oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, que denegó la información consistente en: "... (2) nombre y apellido de las personas capturadas como parte de la campaña [lanzada el 16 de junio de 2016, por la Policía Nacional Civil] –especificar el día mes y año en que fueron capturados – [...] (4) a. copias de las órdenes de captura de los detenidos como parte de la campaña "Los cien más buscados ...".

En ese sentido, el oficial de información respecto de los puntos (2) y (4) a., estableció en la resolución final de la solicitud de información con referencia PNC- UAIP-788-2019, que corre agregada a fs. 17 del expediente administrativo, de fecha **16 de octubre de 2019**, "que en cumplimiento a lo establecido en el Art. 55 del RLAIP se solicitó la información a la unidades generadoras correspondientes, y se recibió memorándum N°SDG/COP//DIEP/360/2019, suscrito por el jefe del Centro de Formación y Control Operativo Policial, por lo cual se resolvió entregar la información objeto de controversia de la siguiente manera: "se encuentra en búsqueda". Siendo esta la resolución impugnada por el apelante, al ser la última notificada previo al inicio de este procedimiento.

El Instituto admitió la apelación del caso y designó a la Comisionada **Claudia Liduvina Escobar Campos**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución. Asimismo, el Instituto, en plena observancia al derecho de audiencia y defensa, se requirió al ente obligado el



informe justificativo de conformidad a lo establecido en el art. 88 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), sin que se haya evacuado tal requerimiento.

Posteriormente, se realizó audiencia oral con la asistencia del apoderado general judicial de la Policía Nacional Civil, [REDACTED] y sin la comparecencia del ciudadano apelante, no obstante estar legalmente citado y notificado, aclarando que dicha audiencia se realizó en repetición de la programada para el día 23 de junio de 2020, ante la imposibilidad de la Comisionada Cesia Yosabeth Mena Reina, de concurrir con su voto, por encontrarse en trámite procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, por la Presidencia de la República, con medida cautelar de suspensión del ejercicio de su cargo; y, ante la renuncia irrevocable presentada por la Comisionada a Silvia Cristina Pérez Sánchez, valorando que ambas conformaron parte del Pleno que se instaló el día 23 de junio recién pasado.

En tal sentido, el Licenciado [REDACTED] no presentó prueba distinta a aportar a la que ya constaba en el expediente, señalando en lo sustancial en sus alegatos que se realizó la búsqueda de la información requerida por el ciudadano [REDACTED] pero no se logró ubicar la misma, dando lectura de los folios en los que consten las diligencias realizadas para su ubicación, afirmando de forma genérica la inexistencia de toda la documentación requerida en la solicitud de información del ciudadano apelante, sin hacer referencia en particular a los dos puntos objetos de controversia de este procedimiento.

Análisis del caso

Este Instituto advierte que el objeto de la presente apelación versa respecto a determinar si la información consistente en “... (2) nombre y apellido de las personas capturadas como parte de la campaña [lanzada el 16 de junio de 2016, por la Policía Nacional Civil] –especificar el día mes y año en que fueron capturados–[...] (4) a. copias de las órdenes de captura de los detenidos como parte de la campaña “Los cien más buscados...”, valorando la naturaleza de la misma, por lo cual, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Breves consideraciones respecto al Derecho de Acceso a la Información y sus límites legales respecto a la divulgación de datos sensibles o confidenciales; (II) Atribución normativa por la cual la PNC compila información confidencial, relacionada al ejercicio de sus funciones y posibilidad de su divulgación; (III) Análisis la finalidad de las órdenes de capturas dentro de un proceso penal y su relación con el

derecho de acceso a la información. (IV) Análisis sobre los requisitos de un acto reproductorio y valoración probatoria en este procedimiento, sobre la entrega de copia de órdenes de capturas.

(I) Este Instituto en su reiterada línea resolutive¹ ha reconocido que el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Así, en la LAIP, se conceptualiza la información pública, como **aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades** (art. 6 literal “c” de la LAIP).

Bajo esta premisa debe señalarse que un límite del DAIP, es la información confidencial que de acuerdo al Art. 6 letra “f” de la LAIP, es **aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal** por una razón de un interés personal jurídicamente protegido y que el Art. 24 de la mencionada ley, establece que información se debe considerar bajo esa clasificación.

De la definición antes referida, debemos atender que para clasificar información como confidencial deben concurrir dos condiciones: 1. Que sea información privada; y, 2. que sea de interés meramente personal.

En atención al presente caso, es importante referirse a la divulgación del nombre de personas particulares, el cual —en general— es considerado un dato sensible, pues sin lugar a dudas identifica a una determinada persona. En tal sentido, la línea resolutive del Pleno de este Instituto ha sido encaminada a establecer que: *“... si un ente obligado cuenta con registros de información que poseen nombres de personas naturales o jurídicas, tiene la obligación de resguardar la información y únicamente entregarla si tiene consentimiento expreso de los titulares de la información [...]. Se tiene la obligación de resguardar los datos personales cuando se trata de nombres de personas que no son servidores públicos no se puede entregar la información, a menos que medie el consentimiento expreso de esta”*. (REF. 155-A-2014, de fecha 6 de marzo de 2015) (Ref. 20-A-2015 de fecha 18 de agosto de 2015).

¹ Referencia 41-A-2014 de fecha 19 de mayo de 2014; Referencia 65-A-2013 de fecha 06 de enero de 2014; Referencia 67-A-2013 de fecha 28 de febrero de 2014; entre otras.



II. Bajo esta lógica, la Policía Nacional Civil, en el ejercicio de sus funciones compila información relacionada a la prevención y combate de toda clase de delitos (art. 1 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil -L.O.PNC-), tal es el caso del “... *nombre y apellido de las personas capturadas como parte de la campaña [lanzada el 16 de junio de 2016, por la Policía Nacional Civil]*...”; sin embargo, esta información no solo se encuentra resguardada por su contenido sensible, sino también por el principio constitucional de presunción de inocencia.

En otras palabras, no puede inobservarse la doble protección que goza la identificación de las personas que han sido detenidas por el presunto cometimiento de un hecho delictivo; por una parte, como se ha establecido en este caso, solo los nombres de funcionarios públicos son —en principio— de trascendencia pública. Por otro lado, la individualización de estas personas, puede transgredir la presunción de inocencia que reviste un carácter constitucional. Aunado a estos puntos, no se cuenta con aportación probatoria que le permita este Pleno contar con elementos para hacer una ponderación distinta de estos derechos.

Al respecto, la Sala de lo Constitucional, ha reconocido que: “... *se parte de la idea que la persona involucrada en el cometimiento de un hecho delictivo es inocente mientras no exista una sentencia condenatoria que demuestre lo contrario.*” (Sentencia Definitiva, dictada dentro del expediente de Hábeas Corpus con referencia 106-2013, de fecha 3 de octubre de 2015). Con esta jurisprudencia, se desarrolla la referida presunción de inocencia, y se reitera la importancia de garantizar y resguardar información relacionada a personas detenidas por el cometimiento de presuntos ilícitos penales.

Sin embargo, con esto no se pretende desconocer la publicidad o divulgación de algunas campañas de captura o de denuncias masivas, como parte de una política criminal o de la persecución de delitos, pero las mismas debe ser bajo una lógica de respeto de derechos constitucionales, lo cual tampoco se ha logrado establecer en este procedimiento, ante la ausencia de aportación probatoria, en particular del ente obligado.

Se reconoce por este Instituto, que entorno a las diligencias de persecución e investigación penal, debe existir una óptica de profundo respeto a la dignidad humana, incluso, desde el momento de formular dicha política criminal. Por lo cual, la entrega de los nombres de las personas capturadas sin conocer el estado de su proceso actual, podría afectar la esfera de su intimidad

personal, aunado a no tener por establecidos los elementos que llevaron a la Policía Nacional Civil a incluir a este grupo determinado de personas dentro de “los cien más buscados”.

No obstante lo anterior, es evidente que ha existido una amplia publicidad de esta campaña de capturas, empero esta divulgación no autoriza *per se* la difusión de todos los nombres de estas personas, sino más bien, debe existir un respaldo normativo que dote de legitimidad y legalidad tal actuar. En este sentido, al no contar con documentación que acredite dicha circunstancia, el Pleno de este Instituto considera que no se cuentan con los elementos mínimos que permitan la autorización de entrega de tal información, de conformidad a los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

(III) Ahora bien, respecto a las órdenes de capturas, es importante determinar la finalidad e información que contienen, señalando la jurisprudencia en materia penal que es el: “Acto legal será aquel dictado en virtud del ejercicio de la triple competencia, material, especial y temporal, revestido de las formalidades legales...” (Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, dentro del proceso con referencia P1201-19-2001, de fecha 28 de marzo de 2001); es decir, es el documento por medio del cual se autoriza la restricción del derecho de libertad ambulatoria de una persona, en respuesta de una investigación penal, y puede ser emitida por la Fiscalía General de la República o por el Juez competente.

Bajo este contexto, parte de las funciones de la Policía Nacional Civil es ejecutar las capturas según los casos previstos por ley (art. 23 N°5 de la L.O.PNC), por lo cual dentro de su acervo documental debe constar aquellas órdenes de captura que responden a la campaña de los cien más buscados, al ser un hecho notorio su realización, siendo difundido por distintos medios periodísticos.

Por su parte, la inactividad de la PNC en el presente procedimiento, no permite establecer los motivos por los cuales se resiste a entregar esta documentación en particular, o si existen elementos que respalden su actuar, por lo cual le corresponderá al Instituto analizar el contenido del expediente administrativo tal circunstancia, valorando que la carga probatoria en materia de acceso a la información pública, le corresponde al Estado y no al solicitante, pues la obligación de entrega corresponde a un gestión pública transparente y anuente a la rendición de cuentas.



En tal sentido debe retomarse que: *“Toda persona, como integrante de la Comunidad titular del poder soberano, tiene el derecho a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan y de ello deriva el derecho de acceso a la información. Además, la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno. Los servidores públicos disponen de la información precisamente en su calidad de delegados del pueblo o representantes de los ciudadanos.”*²

(IV) A. En tal sentido, se procede analizar la única prueba documental con la que se cuenta, es decir, el expediente administrativo aperturado por la Policía Nacional Civil, con referencia C-788-2019, advirtiendo que a fs. 16 y 17 del mismo, corre agregada resolución final emitida el **16 de octubre de 2019** —objeto de impugnación de este procedimiento— y en un acto posterior, ya interpuesto este recurso de alzada, se emitió una segunda resolución definitiva, por parte del oficial de información de la PNC, en fecha **12 de noviembre de 2019** (fs 41 y 42), sin que conste pronunciamiento alguno al respecto por ninguna de las partes, pues como se ha señalado no se presentó informe de defensa y tampoco la parte apelante emitió argumento alguno, al respecto.

En atención a lo cual, es pertinente traer a colación la determinación de los actos administrativos reproductorios, valorando que la inconformidad del ciudadano [REDACTED] deviene de la no entrega de la información solicitada.

Entonces, podemos definir los **actos reproductorios**, como aquellos actos administrativos que, al reproducir otros anteriores firmes y consentidos, reiteran lo decidido ya. En el mismo nivel cabe situar los actos confirmatorios, que reiteran lo decidido en otro anterior firme³.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo en Sentencia definitiva 253-2014, de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, ha establecido que: *“Los actos reproductorios son una de las pocas exclusiones justificables que no afectan, bajo ningún punto de vista, el derecho de acceso a la jurisdicción o a la seguridad jurídica, ya que se limita a repetir o reafirmar una actuación administrativa previa, la cual en todo caso, es la que debe impugnarse en sede jurisdiccional por ser la que originalmente ocasiona agravio”*.

² Sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, emitida el día 5 de diciembre de 2012, dentro del proceso de inconstitucionalidad con referencia 13-2012.

³ <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/actos-reproductorios/actos-reproductorios.htm>

Para el presente caso, como se ha relacionado previamente el ente obligado emitió resolución con el epígrafe “resolución definitiva”, y con fecha posterior, una vez instaurado este procedimiento emitió un segundo acto, identificándolo como “resolución definitiva segunda parte”, pero tal actuación, genera confusión e incluso inseguridad jurídica, pues el administrado no se le puede cargar con la responsabilidad de identificar cuando se ha emitido o no resolución de información de un requerimiento de información, y mucho menos, cuando existe una resolución definitiva.

En atención a lo cual, considerando que en la resolución posterior, se emite en el mismo sentido de negar el acceso a la información sobre la entrega de copias de las órdenes de captura de los detenidos como parte de la campaña “Los cien más buscados”, es pertinente, continuar con el análisis del expediente administrativo con referencia C-788-2019, entendido que la resolución emitida el 12 de noviembre de 2019 es un acto reproductivo del auto de fecha 16 de octubre de 2019, en el sentido que se confirma la negativa a prestar acceso a lo requerido, haciendo el análisis correspondiente, sobre los motivos de tal restricción, a fin de establecer la verdad material en este caso.

Lo anterior, también garantiza derechos de defensa, igualdad, audiencia y debido proceso, valorando que el ente obligado ofertó como prueba el contenido del expediente administrativo, consignado en la segunda resolución el motivo de la negativa en acceder a lo solicitado, por lo cual se reafirma en una extensión de la primera resolución, garantizando la protección no jurisdiccional del ciudadano apelante.

B. Es así que a fs. 40 del referido expediente administrativo, corre agregado, oficio sin número de fecha 6 de noviembre de 2019, por medio del cual se informó al ciudadano apelante, que por acuerdo PNC/DG/ N° A- 1194-10-2016, de fecha 24 de octubre de 2016, firmado por el señor Comisionado Howard Augusto Cotto Castaneda, en su calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, declaró como reservada todas las bases de datos de la Policía Nacional Civil, así como la información relativa al personal de esa institución policial involucrada en la producción, obtención, transformación, análisis y almacenamiento de la información que alimenta las bases de datos. Sin embargo, al buscar en el Portal de Transparencia de la PNC, el índice de la información reservada, el mismo no está actualizado.



A pesar de tal carencia, el oficial de información de la PNC emitió la referida “resolución final parte II”, de fecha 12 de noviembre de 2019—una vez interpuesto el recurso de apelación—; en la cual se ordenó entregar al ciudadano apelante la respuesta obtenida por la División de Cumplimiento a Disposiciones Judiciales, sin que tampoco se adjuntó el índice de información reservada.

En tal sentido, al ser dicho acto un acto confirmatorio de la resolución emitida el 16 de octubre de 2019, en respeto al principio de debido proceso y verdad material, se procede a realizar el análisis de la presunta declaración de reserva argumentada, siendo la única manifestación o actividad emitida por la PNC, respecto al motivo por el cual se impide el acceso a las órdenes de capturas solicitadas.

En consecuencia, se procede a verificar la concurrencia de los siguientes requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad, y ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

(a) Legalidad. La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

(b) Razonabilidad. Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública como reservada. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

(c) Temporalidad. Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el arts. 20 de la LAIP y 31 letra “F” de la RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

Entonces, es pertinente verificar el cumplimiento de los tres requisitos. En cuanto al de legalidad el ente obligado no ha realizado un ejercicio de adecuación conforme a las causales del

art. 19 de la LAIP. Es importante acotar que dicha adecuación no es automática y mucho menos antojadiza, máxime que lo que se está limitando es un derecho de índole constitucional; por ello, dicha actividad debe sujetarse a la lógica y a la razonabilidad; lo cual, en este caso, no se observa de primera mano, sin hacer ningún ejercicio de análisis y adecuación de la norma al hecho en concreto.

En este caso, al analizar la prueba se observa que la declaratoria de reserva carece de un fundamento específico en hechos concretos y lógicos que la divulgación de la información, cause un menoscabo en los bienes jurídicos que buscan proteger, conforme al art. 21 de la LAIP y 38 de su Reglamento, sin determinar la causal de excepción al acceso a la información prevista en el art. 19 de la LAIP.

Entonces, al verificar que no se ha cumplido con los requisitos anteriores, resulta innecesario e inoficioso verificar el requisito de **temporalidad**, el cual sea dicho de paso, no se logra determinar, por lo cual, es pertinente revocar la declaratoria de reserva decretada en el acuerdo número PNC/DG/Nº A- 1194-10-2016, de fecha 24 de octubre de 2016; y por ende, la información requerida en el presente caso, por no lograrse tener por establecido el fundamento por el cual se limitó su acceso.

Al respecto, el marco jurídico interamericano ha establecido que el Derecho de Acceso a la Información Pública debe implementarse bajo los principios de máxima divulgación y buena fe; de lo cual se desprende que “...*cualquier restricción debe ser motivada e implica una carga para el Estado para probar las razones que motivan el rechazo...*”⁴ (itálica y negritas propias).

No habiéndose establecido en legal forma una restricción a la divulgación de la documentación requerida en este procedimiento, el pleno de este Instituto considera hacer algunas acotaciones respecto a la competencia del ente obligado para hacer entrega de la misma.

A tenor de lo anterior, es pertinente establecer que de conformidad a lo establecido en el art. 4 a) de la LAIP, **existe obligación de entregar la información que está en poder de los entes obligados**, al ser de naturaleza pública y de difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley, como se ha desarrollado en el romano primero de esta

⁴ Corrupción y Derechos Humanos: Estándares interamericanos: Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de diciembre de 2019; pág. 91



resolución. Entonces, habiéndose establecido que la información del requerimiento en el presente caso está en poder de la PNC, al ser su obligación ejecutar las órdenes de capturas administrativas y judiciales conforme a lo establecido en la ley, dicha institución debe proporcionar la misma al ciudadano apelante.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que el argumento presentado por la Policía Nacional Civil únicamente responde a aquellas órdenes de capturas emitidas por autoridad judicial, sin que se señale ninguna alegación sobre las órdenes de carácter administrativo, correspondientes a la campaña “Los cien más buscados”, si es que las hubiere, debiéndose verificar este punto en una nueva búsqueda de la información.

Debe considerarse que la realización adecuada de búsqueda y localización de información pública, para su posterior entrega, es parte integral de la dinámica gerencial que realiza el Estado, especialmente cuando se trata dar respuesta a la controlaría social del ejercicio de su función pública, por lo cual el oficial de información debe retomar una actitud eficiente respecto a lo requerido, pues incluso debe comprobarse la imposibilidad de su cumplimiento - por inexistencia por ejemplo- y no solo alegarse. Es así, que el derecho de acceso a la información, no se garantiza solo en la emisión de una resolución, sino que su fundamento debe incluir las acciones realizadas para su consecución de forma integral.

En razón de lo anterior y a efecto de garantizar DAIP del apelante, no solo basta con argumentar que la información es de carácter reservada sino que se debe motivar efectivamente tal circunstancia; por tanto, corresponde modificar la resolución objeto de controversia y ordenar bajo los parámetros antes señalados la entrega de la información requerida por el apelante de forma integral

Asimismo, si en dicha información se encuentran datos personales como el nombre, dirección, teléfono y/ o edad de la persona detenida - u otra información analógica-, que no sea servidor público, deberá realizarse la respectiva versión pública de conformidad con el Art. 30 de la LAIP.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 2, 6, 18, 86, 192 y 193 de la Constitución, 52 inciso 3 °, 58 letras b, d y g; 96 letra “b” de la LAIP; y, 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) Revocar el contenido de la resolución impugnada y del acto reproductor posterior, emitidos por el oficial de información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, en fechas 16 de octubre de 2019 y el 12 de noviembre de 2019, respectivamente, en los puntos objeto de controversia, respecto a los numerales 2 y 4 de la primera resolución, ordenando:

a.1 Denegar la entrega de la información relacionada al “... *nombre y apellido de las personas capturadas como parte de la campaña [lanzada el 16 de junio de 2016, por la Policía Nacional Civil] ...*”; en virtud, de las consideraciones realizadas en el romano I de la presente resolución.

a.2. Revocar la declaratoria de reserva emitida por medio del acuerdo número PNC/DG/ N° A- 1194-10-2016, de fecha 24 de octubre de 2016, debiendo entregar al ciudadano [REDACTED] en versión pública, “*copias de las órdenes de captura de los detenidos como parte de la campaña “Los cien más buscados...”*”, en el plazo de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

a.3 Ordenar a la **Policía Nacional Civil (PNC)**, por medio de su titular, dentro del plazo de **siete días hábiles** contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, ordene la realización de nueva búsqueda de “*copias de las órdenes de captura de los detenidos como parte de la campaña “Los cien más buscados...”*”, en caso de existir órdenes giradas por la Fiscalía General de la república, valorando que la reserva a la que se refiere el literal anterior, responde a las órdenes de captura emitidas por el juez competente. Para este caso, deberá realizarse una búsqueda en el acervo documental que respalde el cumplimiento de las órdenes de capturas solicitadas a la PNC, junto con el oficial de gestión documental de la Institución de lo cual deberá levantarse un acta, la cual deberá enviarse a la Oficial de información para la entrega de la información, en versión pública, o declarar la inexistencia de la información con base a esos hechos.

b) **Ordenar** a la PNC que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la entrega de la documentación solicitada por el ciudadano apelante respecto al requerimiento cuarto de su solicitud de información, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

c) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

d) **Ordenar** la devolución del expediente administrativo al oficial de información de la Policía Nacional Civil o a la persona designada para tal efecto.

e) **Publíquese**, oportunamente

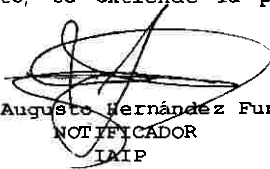
Notifíquese. —



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA SUSCRIBEN.

SD/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los un días del mes de febrero de dos mil veintiuno.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

